

Pablo DÍAZ MORLÁN, *Horacio Echevarrieta 1870-1963. El capitalista republicano*, LID, Madrid, 1999, 407 pp.

Trabajos como esta biografía, dice Antonio Gómez Mendoza en su prólogo, permiten desmontar el andamiaje puesto en pie por algunos historiadores que ven en los factores de oferta una explicación del atraso económico español. Lo que ha faltado no han sido empresarios, continúa, sino historiadores con la entrega necesaria como para llevar a cabo investigaciones de esta envergadura, capaces de poner de manifiesto la existencia de empresarios con suficiente amplitud de miras como para discernir oportunidades de inversión en sectores de alto riesgo.

Tiene una parte de razón Antonio Gómez Mendoza. Sin duda, ha habido empresarios en la España contemporánea. Es verdad que tras una época en la que los factores de demanda —la inestabilidad y escasas dimensiones del mercado interior— parecieron dar la clave del atraso español, cierta historiografía giró su atención y quiso encontrar en la oferta, en los empresarios, una explicación imprescindible. Los empresarios españoles fueron escasos, ha escrito Gabriel Tortella, como lo demuestra la decisiva presencia de intereses extranjeros en sectores clave de la economía a lo largo del siglo XIX y, además, como también explicó Pedro Fraile, cuando los hubo, tendieron a buscar rentas del Estado para protegerse al mismo tiempo de la competencia interna y de la competencia exterior.

Tanto una como otra explicación resultan finalmente insuficientes, y quizás haya llegado el momento en que puedan compensarse mutuamente para encontrar nuevas claves explicativas del desarrollo de la economía española, y también de la sociedad y la vida política. En los últimos tiempos la historia empresarial se ha desarrollado de manera notable, y no sólo en la historia de empresas sino en las biografías de empresarios concretos, que es otra cosa. Porque exige un tipo de investigación diferente y alumbra explicaciones de distinta complejidad. El libro que comento es una buena muestra de ello. Pablo Díaz Morlán tuvo el enorme acierto de descubrir el fondo documental de la comunidad de bienes Echevarrieta y Larrínaga, que había acabado depositada en la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, y ha llevado a cabo una minuciosa investigación que le ha obligado a combinar la historia económica y empresarial con la historia política, como nos ha ocurrido a quienes, de una u otra manera, nos hemos acercado a esta materia.

Horacio Echevarrieta, uno de los casos de esa clase empresarial vasca que surgió en las primeras décadas de siglo, heredó a la muerte de su padre, Cosme Echevarrieta, en 1903, una comunidad de bienes, Echevarrieta y Larrinaga, fundada en 1882 y dedicada inicialmente a la explotación en arriendo de minas de hierro de la cuenca de Somorrostro y, poco más tarde, también a la especulación en solares del ensanche de Bilbao. Pero heredó también el liderazgo del republicanismo en Vizcaya, obtenido por don Cosme después de una agitada dedicación a la lucha contra el carlismo. Y Horacio Echevarrieta no sólo amplió

y diversificó las inversiones empresariales del grupo extendiendo su actividad a sectores como el eléctrico, el inmobiliario y la construcción naval, sacándolo fuera del País Vasco, sino que aceptó la candidatura a Cortes por la Conjunción republicano-socialista en 1910 y ocupó un escaño en el Congreso de los diputados ese año, en 1914 y de nuevo en 1916. Todavía más, en 1917, cuando la expansión y diversificación del grupo alcanzaba su mayor complejidad, Horacio Echevarrieta se sintió obligado a renunciar a su actividad política por haberse visto implicado en la convocatoria de la huelga de agosto, último episodio de una convulsa crisis que estuvo a punto de acabar con la Monarquía constitucional. Echevarrieta abandonó entonces su actividad política directa, aunque nunca se desprendió de esa imagen de *capitalista republicano* con la que Díaz Morlán subtítulo su libro y que le dio una identidad peculiar.

La compra aquel año de los astilleros de Vega-Murguía en Cádiz, al amparo y por las expectativas despertadas por la ley de protección a la industria nacional, iban a determinar en los años siguientes tanto sus mayores momentos de gloria como las razones de su fracaso final. Porque los astilleros despegaron con una cartera de pedidos más que suficiente en la esperanzadora coyuntura de la guerra mundial, pero la crisis de la posguerra trajo consigo grandes dificultades y Echevarrieta hizo una opción muy arriesgada: disputar a la Sociedad Española de la Construcción Naval su cuasi monopolio en el suministro de buques para la Armada. La SECN tenía estrechos lazos con los intereses ingleses a través del consorcio Vickers y muy sólidas apoyaturas en España, sin ir más lejos, con el Banco Urquijo. Para competir con ellos, Echevarrieta buscó la alianza con los alemanes, muy interesados en disponer de enclaves donde desarrollar sus prototipos, a la vista de las limitaciones que el Tratado de Versalles les había impuesto, y de abrir al mismo tiempo nuevos mercados. La ofensiva de Echevarrieta fue dura, y hacia 1928 pareció culminar con éxito. Pero fue una falsa impresión. La concesión del monopolio de petróleos a un consorcio de bancos encabezado por el Urquijo, en un concurso al que concurrió también Echevarrieta, fue síntoma de que las decisiones públicas se inclinaban a favor de la competencia. Los astilleros tuvieron que sufrir la anulación de pedidos y la situación se hizo cada vez más apurada. Con la República no mejoró, y los años treinta contemplaron el declinar de la casa Echevarrieta, después de haber sido una de las más importantes del entramado industrial del país.

Horacio Echevarrieta fue, sin duda, un empresario, como lo fueron Ramón de la Sota o Nicolás Marfá de Urgoiti. Innovaron, ampliaron, diversificaron... arriesgaron y compitieron. Pero también es cierto que, en distintos niveles y con diferente grado, en su actividad empresarial buscaron al Estado, y lo hicieron casi siempre apoyándose en sus relaciones personales, sociales y políticas. Un «clientelismo empresarial», como lo llama Pablo Díaz Morlán en el caso de Horacio Echevarrieta para distinguirlo del caciquismo rural o del clientelismo político, que llegaba a diputados, ministros y exministros, jueces y miembros de la administración pública en muy diferentes escalones. Pero Echevarrieta no quiso su red de relaciones y de favores para ponerla al servicio de sus intereses personales o políticos, sino para beneficio de sus empresas. «La lucha por hacerse con el Estado como cliente —escribe Díaz Morlán— no significó tanto la adopción de una política de búsqueda de rentas como la decisión de lanzarse a una dura competencia, con la utilización de to-

dos los instrumentos políticos que estuvieran a su alcance, para garantizar trabajo a sus astilleros, gravemente afectados por la crisis de la construcción naval de carácter civil a mediados de los años veinte» (p. 250). Que esta estrategia fracasara, afirma el autor, no le quita importancia al peso real de sus relaciones con Primo de Rivera y el propio Alfonso XIII, derivadas en gran medida de su decisiva mediación para la liberación de los prisioneros que en Marruecos mantenía el líder rifeño, Abd-el-Krim, desde el desastre de Annual. Esa proximidad al poder no impidió, sin embargo, que Echevarrieta mantuviera la propiedad de *El Liberal* de Bilbao, un periódico muy crítico hacia la dictadura del que era cuasi-director el socialista Indalecio Prieto quien, con la llegada de la República se convirtió en ministro de Hacienda, primero, y de Obras Públicas después.

Pero para cuando se proclamó la República, la casa Echevarrieta había ido consumiendo recursos propios —a lo que no fue ajeno el coste asumido por la separación de la familia Larrínaga—, y dependía cada vez más de la financiación ajena y de los compromisos del Estado. Las deudas se acumularon y Echevarrieta se vio obligado a desprenderse de muchas de las participaciones y derechos que habían formado su entramado industrial en los años veinte. La situación no era de quiebra, porque el valor total del activo superaba al pasivo exigible, pero parecía inevitable la suspensión de pagos por falta de liquidez. Y entonces, Horacio Echevarrieta fue detenido y pasó más de nueve meses en la cárcel, acusado de implicaciones en el proceso por el alijo de armas descubierto con ocasión de la revolución de octubre de 1934... «Entre enero y marzo de 1935, Horacio Echevarrieta se dio de baja en el Club de golf de Neguri, en la Sociedad Bilbaína e incluso en el club marítimo del Abra...», y eso que la navegación había sido para él, no ya una afición, sino una obsesión. Eso cuenta Díaz Morlán en medio de una detallada explicación de las razones y la manera en que la fortuna de Horacio Echevarrieta y su tinglado empresarial desaparecían. Al finalizar la guerra civil, a pesar de su pasado republicano, se respetaron su vida y sus bienes. Su actividad se redujo a la de los astilleros de Cádiz, que le fueron restituidos pero que, tras distintos avatares y una trágica explosión que se produjo en 1947, cuatro años más tarde, a petición del propio empresario, fueron incautados por el Estado. Había pedidos y la facturación anual era relevante, pero la sociedad estaba quebrada, y pasó a manos del INI. En 1956 Echevarrieta vendió a Emilio Botín su última participación en los astilleros. Cinco años más tarde, en 1963, murió.

El libro de Pablo Díaz Morlán no es sólo una historia económica de la casa Echevarrieta y Larrínaga, sino, como he dicho más arriba, una contribución importante a la historia social y política de este país. De la misma manera que lleva a reconocer la existencia de empresarios en España, permite calibrar las razones y el peso de la búsqueda de rentas del Estado. Por eso mismo, proporciona encarnadura concreta a esa «clase empresarial» sobre la que muchas veces generalizamos alegremente, tanto desde la historia económica como desde la historia social y política.

MERCEDES CABRERA